



INFO XVII.912

informativo@attac.org

22 de mayo de 2017

<http://attac-info.blogspot.com>

Crimen contra la libertad

Mundo

INTERNET, HACKERS Y SOBERANÍA. EL ataque informático de los últimos días empleó un software malicioso diseñado para bloquear el acceso al computador o sistema informático, hasta tanto se pague una determinada suma de dinero. El término ransomware alude a este dispositivo extorsivo, cuya reciente modalidad fue bautizada como WannaCry.

UN LIBRO PARA PENSAR LAS MIGRACIONES Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO GLOBALIZADO DE HOY Por un lado, vivimos en la era de la globalización de las migraciones, en la que prácticamente todos los países están atravesados por flujos migratorios en origen, tránsito o destino y el mundo como tal es configurado por una importante presencia de migrantes y refugiados.

Latinoamérica

EL RELATO PERVERSO DE LA VIOLENCIA EN VENEZUELA Los grandes medios privados están construyendo un relato perverso de la violencia en Venezuela que ha penetrado en amplios sectores incluso en algunos intelectuales progresistas. Según este relato, todas las muertes (42 desde el 3 de abril de este año) y los heridos (que alcanzan a 700) son atribuidos al gobierno de Maduro, que es presentado “como una dictadura o régimen que reprime salvajemente al pueblo”.

MÉXICO: LA VORÁGINE: CRIMEN CONTRA LA LIBERTAD La violencia que en México nos envuelve sin ley y sin piedad se desencadenó como un turbión que recorre tierras, aguas, aire, todo el territorio de la nación, cuando la casta gobernante –Ellos, como los llama el pueblo– se jugó a los azares del mercado financiero mundial, por definición sin otra ley que la ganancia.

ARGENTINA: CRÍTICAS AMBIENTALISTAS A LA CONSTRUCCION DE NUEVAS CENTRALES NUCLEARES Calculan que costarán cuatro veces más que el plan RenovAr, pero producirán menos energía. El Gobierno busca en paralelo impulsar la minería de uranio, una de las más contaminantes y con graves antecedentes en el país

Mundo

INTERNET, HACKERS Y SOBERANÍA

Fredes Luis Castro

El ataque informático de los últimos días empleó un software malicioso diseñado para bloquear el acceso al computador o sistema informático, hasta tanto se pague una determinada suma de dinero. El término ransomware alude a este dispositivo extorsivo, cuya reciente modalidad fue bautizada como WannaCry. Los atacantes se habrían apropiado de una de las tantas vulnerabilidades detectadas y almacenadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), de allí que Microsoft responsabilizara a la NSA por la fuga y posterior pandemia, comparando la propagación del virus con una sustracción de misiles Tomahawk al Ejército estadounidense. El héroe de la jornada fue un joven inglés de 22 años que descubrió un kill switch (interruptor asesino o de desconexión) que impidió una contaminación mayor.

Los sospechosos de siempre



Se dificultó dirigir acusaciones a la patria de Putin, porque los rusos también fueron afectados. De hecho, en esta oportunidad las sospechas se cultivan en Moscú contra sus contradictores de siempre. Mikhail Delyagin, director del Instituto de Problemas de la Globalización, lo expresa sin tapujos: “Respeto la honestidad de los Estados Unidos. Nos amenazaron con un ciberataque y es lo que se produjo.” Sin embargo, especialistas rusos del Consejo de la Economía Digital lo descartan, por juzgarlo un ataque **demasiado estúpido**.

Sucede que pese a la velocidad y la extensión de WannaCry, llaman la atención los déficits del software, impropios **de hackers experimentados**. La inclusión del

interruptor mencionado en el código del software facilitó la detección y paralización del ataque, otras fallas directamente no permiten identificar a las víctimas y sus desembolsos. Los desperfectos son propicios para alentar conspiraciones. Es posible conjeturar que el objetivo no fue recaudar dinero, sino humillar a una de las más importantes agencias de inteligencia de Washington. Pero si no fueron los rusos, ¿a quién culpar?

Para buena parte del imaginario global, cualquier cosa que se diga de Corea del Norte es creíble, por ende ya existen **los que indican** que el grupo Lazarus, desde hace años sindicado de ser amparado por Pyongyang, está involucrado en el ataque con WannaCry. Lazarus es conocido principalmente por el demoledor ataque contra Sony Pictures a fines del 2014, pero a posteriori fue acusado de **desfalcar arcas bancarias** de Filipinas, Ecuador, Vietnam y Bangladesh. ¿Por qué sospechan de Lazarus? El código de programa de puerta trasera empleado en una versión pretérita de WannaCry, llamado Contopee, también fue utilizado en sus intervenciones por Lazarus.

Gobernanzas y acciones públicas

¿Es posible que se materialice el “peor” escenario descrito en **el informe** de la Comisión Global sobre Gobernanza de Internet, en el cual la intensidad de las acciones maliciosas y de los controles políticos estimulen una desconfianza tal que reduzca más que significativamente el uso de la Internet? Es interesante advertir que la comisión ubica en el mismo plano de peligrosidad a la malicia criminal con la “excesiva regulación gubernamental” ¿Considerarán los miembros de la comisión que existió un excesivo despliegue de gobierno en **el ciberataque norteamericano** dirigido contra el programa nuclear iraní del 2013, o en el intento de manipulación de televisores y smartphones por **hackers de la CIA**, para convertirlos en hogareños y móviles vigilantes?

Con seguridad que a los globales gobernanzantes de la Internet no les gusta nada el Escudo Dorado chino, y su capítulo estrella: el Gran Cortafuegos, ingeniería legal y tecnológica diseñada para restringir accesos a servicios y plataformas digitales foráneos. En rigor de verdad, es posible obtener habilitaciones, las que se conceden **si se manifiesta conformidad** con los intereses nacionales establecidos por las autoridades comunistas. Al Reino del Medio no le interesa formar parte de aldea global alguna, por el contrario estima que las únicas plataformas reales son las soberanas y opera para que las digitales, como el resto de las actividades económicas, se subordinen a los lineamientos estatalmente fijados, al menos en la geografía que gobiernan.

El 11 de mayo de este año Donald Trump emitió una orden ejecutiva para **fortalecer la ciberseguridad de las redes federales y las infraestructuras críticas**. Se trata de un conjunto de enunciados, estándares y buenas prácticas, que, en primer término, aseguran continuidad al **Marco para la mejora de la ciberseguridad de las infraestructuras críticas** ordenado por Obama. La ciberseguridad estadounidense cuenta, entonces, con un respaldo bipartidario. Pero conviene registrar que en materia securitaria tan sensible, aparecen involucradas, por orden presidencial, las Secretarías de Trabajo y de Educación, con el objeto de participar con otras secretarías en la consideración y promoción de programas que desarrollen la fuerza de trabajo cibersecuritaria del futuro que su país necesita, en los sectores público y privado, con acciones que deben aplicarse desde los estudios primarios, hasta los más altos niveles, sin perjuicio de cursos y aprendizajes técnicos no universitarios. Además ordena al Director Nacional de Inteligencia que observe y revise los esfuerzos desarrollados por otros países, en tanto puedan comprometer la competitividad norteamericana en ciberseguridad.

Conclusiones

De ser cierto que el modelo de negocios primario de la Internet se edifica sobre **una vigilancia masiva** es del todo coherente que la criminalidad se especialice en la sustracción de informaciones más o menos íntimas. La progresiva privatización de la vida social, para beneplácito lucrativo de los monopolios extractivistas de datos del capitalismo digital, incrementa los bancos y depósitos de informaciones a los que apuntan los cibercriminales. Los ciberataques se multiplicarán en tanto la Internet apueste antes por la interacción social y la conectividad que por la inclusión y la libertad, la última mucho más predicada que actualizada por las figuras icónicas del capitalismo digital.

El desarrollo de capacidades cibersecuritarias es asunto de primer orden, para una eficaz y soberana defensa de los asuntos vitales de cada nación. El estadio tecnológico en que cada país se encuentra determina el tipo de discurso promovido en foros internacionales, y el grado de apertura de las políticas públicas de Internet y digitales. Pero incluso en los países tecnológicamente más avanzados existe una activa intervención, con el elemental fin de mantener sus ventajas en el largo plazo.

Los gobiernos que confíen en invisibles manos de mercado o improvisen ejercicios desactualizados deberán recomendar a sus ciudadanos que sigan las tres reglas comunicadas por el criptógrafo Robert Morris, jefe científico del Centro Nacional de Seguridad Informática de la NSA: no poseer una computadora, no encender una computadora y, por último, no usar una computadora.

<http://fredescastro7.wixsite.com/shushwap/single-post/2017/05/16/Internet-hackers-y-soberan%C3%ADa>
<http://www.alainet.org/es/articulo/185509>

UN LIBRO PARA PENSAR LAS MIGRACIONES Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO GLOBALIZADO DE HOY

Wooldy Edson Louidor

El texto parte de una de las grandes ambivalencias del mundo de hoy.

Por un lado, vivimos en la era de la globalización de las migraciones, en la que prácticamente todos los países están atravesados por flujos migratorios en origen, tránsito o destino y el mundo como tal es configurado por una importante presencia de migrantes y refugiados.

Por otro lado, se observan cada vez más en este mundo globalizado el estallido de crisis humanitarias en cascada (por ejemplo, enfrentamos la segunda crisis de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial), violaciones sistemáticas de derechos humanos y una desprotección generalizada que afectan a la gran mayoría del total de 244 millones de migrantes y los 65,3 millones de personas desplazadas forzosamente a lo largo y ancho del planeta (según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para 2016 y 2015 respectivamente).

Además, las respuestas que se han dado hasta ahora al problema son insuficientes y, en algunos casos, contraproducentes, ya que consisten en endurecer las medidas migratorias, hostilizar a las personas migrantes o paradójicamente en no dar ninguna respuesta a extranjeros (entre ellos, niños, mujeres y otras categorías vulnerables) con necesidad de protección internacional, dejándolos en manos de redes criminales o dejándolos morir durante la trayectoria y la travesía.

Esta ambivalencia entre la globalización de las migraciones y los vacíos de protección cada vez más generalizados de los migrantes y refugiados nos lleva a preguntarnos qué tan válido sigue siendo hoy en día el discurso de la universalidad de los derechos humanos y si realmente dicha universalidad serviría para responder a los vacíos de protección mencionados.

A lo largo de un poco más de 190 páginas, el libro sitúa, tomando en cuenta la coyuntura actual, el drama de las migraciones entre los contrastes de la globalización en su complejidad plurívoca y los espejismos del



discurso hegemónico-occidental de la universalidad de los derechos humanos.

Algunos contrastes de la globalización señalados por el libro son los siguientes.

Por ejemplo, cada vez nos aproximamos más como seres humanos (prácticamente todos los rincones del mundo han sido “descubiertos” y “visitados”), debido a la compresión espacio-temporal; lo cual, sin embargo, provoca miedo, inseguridad y políticas de hostilidad (cierre de fronteras, repliegue identitario, xenofobia, etc.) contra el vecino, el otro, el diferente, principalmente el que es pobre y necesita la protección de sus derechos y su dignidad.

Otro contraste: la vertiginosa circulación de los flujos de información, capital y bienes va a la par con lo que el papa Francisco llama la “globalización de la indiferencia” ante el sufrimiento ajeno. Pareciera que vivimos en una “aldea global”, pero no volvemos menos humanos, menos sensibles.

Por otra parte, el discurso de la universalidad de los derechos humanos, proclamada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y otros instrumentos posteriores, hereda los lastres colonialistas de otras creaciones del derecho, tales como el Derecho de Gentes (por ejemplo, durante el “descubrimiento” del Nuevo Mundo) y los Derechos del Hombre (en la modernidad ilustrada).

Uno de los lastres colonialistas tiene que ver con el uso o la instrumentalización, por parte de países europeos, de estos instrumentos de derecho e incluso de valores éticos (hospitalidad, justicia, etc.) para construir y negar al otro (alegando su condición “bárbara”) y justificar su opresión, su esclavización y su muerte (cultural, social y física).

La empresa de la conquista y posterior colonización de las Américas, el racismo y la trata negrera son ejemplos contundentes de esta manera colonialista de proceder; a la cual no escapa el discurso de la universalidad de los derechos humanos, hegemonizado por países noratlánticos que aún les niegan a los “otros” un lugar como “sujetos” de derechos humanos y como “interlocutores válidos”.

Los migrantes, que son los otros “otros”, son víctimas de esta exclusión y de las violaciones de sus derechos humanos y se encuentran totalmente desprotegidos a lo largo y ancho del planeta; lo cual evidencia que los derechos humanos no son realmente universales, es decir que aún no se aplican a todas y todos en cualquier tiempo y lugar. La excepción es la regla.

Esta preocupante situación de los migrantes -que desenmascara los discursos hegemónicos (llenos de espejismos y colonialidad) de la universalidad de los derechos humanos- nos obliga hoy en día a resignificar dicha universalidad.

Del mismo modo, nos lleva a replantear la actual globalización (hegemónica y neoliberal) que genera millones de víctimas (en particular, en países del Tercer Mundo en África y América Latina, por ejemplo) y las desarraiga (por medio de las guerras, la destrucción del medioambiente, la realización de megaproyectos de desarrollo y otros efectos del capitalismo global), convirtiéndolas en seres humanos sin mundo y sin hogar.

En este panorama desolador, la hospitalidad aparece a todas luces como una respuesta ética, jurídica y política pertinente a esta urgente labor de dar lugar y cabida a cada vez más seres humanos, familias e incluso comunidades enteras, desarraigados, obligados a vagar en el mundo y atrapados en no lugares.

La alteridad, en concreto el hecho de no pertenecer a la misma comunidad política y al mismo *ethos* cultural (al Estado nación), no puede seguir siendo un pretexto para no acoger al “otro” con necesidad de protección internacional, haciéndole la guerra, dejándolo morir, cerrándole la puerta, tratándolo como un enemigo o una eventual amenaza (es decir, aplicando el estado de excepción).

También es necesario el reajuste de un mundo que privilegia el mercado, la ganancia, los bienes, la acumulación y la riqueza material, en detrimento de seres humanos “otros” y de la misma naturaleza; en pocas palabras, urge la creación de un mundo humano y eco-compatible que se ajuste a todos los seres humanos (y no, a favor de unos pocos y en contra de otros-la gran mayoría-).

Finalmente, el derecho internacional requiere de serias transformaciones, empezando con la ruptura con sus ataduras de la soberanía estatal y propiciando el “polílogo” simétrico con otros actores (profesionales de otras disciplinas, miembros de organizaciones no gubernamentales, redes de migrantes, etc.) y con otras culturas, para poder responder de manera adecuada a los grandes retos y problemas actuales –en particular, los de las

migraciones- que afectan a la humanidad en cuanto tal.

Wooldy Edson Louidor, profesor e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, Pontificia Universidad Javeriana.

Latinoamérica

EL RELATO PERVERSO DE LA VIOLENCIA EN VENEZUELA

Eduardo Tamayo G.



Los grandes medios privados están construyendo un relato perverso de la violencia en Venezuela que ha penetrado en amplios sectores incluso en algunos intelectuales progresistas. Según este relato, todas las muertes (42 desde el 3 de abril de este año) y los heridos (que alcanzan a 700) son atribuidos al gobierno de

Maduro, que es presentado “como una dictadura o régimen que reprime salvajemente al pueblo”.

Víctimas inocentes

Un primer recuento realizado por las autoridades venezolanas de las circunstancias en que murieron desde comienzos de abril 39 personas (1) indica que 18 de ellas no participaban en las protestas, 7 si lo hacían y 9 murieron electrocutadas en un local comercial durante los disturbios nocturnos en el sector del Valle, Caracas, en los que grupos de ultraderecha acosaron a una maternidad y se produjeron saqueos. Cinco casos aún permanecen en investigación. De estos datos llama la atención que la mayoría (el 46%) eran personas inocentes que se encontraban cerca de los lugares de las protestas, como es el caso de Almeline Carrillo, quien fue impactada por una botella de agua congelada lanzada desde un edificio, en La Candelaria (Caracas) a un grupo de simpatizantes chavistas.

Cuatro personas (Jairo Ortiz Bustamante, Daniel Queliz Araca, Christian H. Ochoa Soriano y Gruseney Antonio Canelón) fueron muertos presuntamente por agentes policiales. También perdieron la vida el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Neumar Sanclemente Barrios, y el policía Gerardo Barrera. De estos casos, por lo menos dos corresponden a “falsos positivos”, es decir ejecutados por los mismos grupos violentos para atribuírselos al gobierno de Nicolás Maduro.

Doble discurso

Frecuentemente en la televisión se presentan una y otra vez noticias e imágenes (sobre todo cuando actúa la Guardia Nacional Bolivariana contra los manifestantes), se ocultan otras (por ejemplo el ataque de grupos de derecha a hospitales, escuelas y edificios públicos) y se manipulan unas terceras. Ya no importa investigar, detenerse a indagar quiénes son las víctimas, en qué circunstancias perdieron la vida, quiénes son los presuntos responsables, qué armas utilizaron, quien financia la violencia, ni mucho menos cuáles son sus objetivos y qué métodos se están utilizando.

El periodismo de investigación está en deuda en el caso de Venezuela y por supuesto esto jamás será practicado por muchos medios corporativos que desde hace muchos años forman parte de una campaña internacional en la que no solo han satanizado a Hugo Chávez (prácticamente desde que asumió el poder en 1999) y ahora con más fuerza a Maduro, sino que han difundido una imagen distorsionada de Venezuela. Ahora apoyan abiertamente a la oposición derechista en sus intentos de desestabilizar y derrocar a la revolución bolivariana.

Los líderes derechistas más visibles de la oposición (Henry Ramos Allup, Julio Borges) manejan un doble discurso en relación al conflicto venezolano, dicen que las manifestaciones son pacíficas, que se deben al descontento de la población frente a la difícil situación que vive Venezuela. Sin embargo, miran a otro lado y nunca condenan los actos violentos de sus partidarios.

Otros, en cambio son más frontales: Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular y vicepresidente de la Asamblea Nacional, dice: “Me eligieron para derrocar a este maldito Gobierno”, y en este propósito, se lo ve en YouTube felicitar a los encapuchados que siembran el terror en Caracas y el resto del país. (2) Por su

lado, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien está encarcelado tras los hechos violentos ocurridos en 2014 en el que murieron 43 personas 700 fueron heridas, dice: "Los muertos no pueden ser en vano". Desde comienzos de abril van 42, ¿serán ya suficientes?

Volver ingobernable a Venezuela

El objetivo de la violencia es claro: crear el caos y volver ingobernable el país con el fin de derrocar a Maduro. Luego de que ganaron la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, el presidente de la misma, Henry Ramos Allup, declaró sin inmutarse que su objetivo era derrocar al gobierno en 6 meses. Luego, sin tener atribuciones, destituyeron tres veces al Presidente Maduro. También han descartado el diálogo propuesto por Maduro y apoyado por el Papa Francisco y la UNASUR para encontrar salidas pacíficas al conflicto. Ahora reclaman la convocatoria inmediata a elecciones, la "liberación de los presos políticos" y la apertura de "un canal humanitario para abastecer de medicinas y alimentos al país".

Pero la estrategia violenta se complementa con otras como la desestabilización económica (manipulación de la tasa de fijación del dólar, desabastecimiento de productos vitales y de medicinas), el llamado a la intervención extranjera en el país, los intentos de aislar a Venezuela del concierto internacional, la ofensiva de la OEA dirigida por Luis Almagro y la intervención y hostilidad de Estados Unidos, entre otros.

Luz verde para el terror

Desde que la OEA adoptó, el 3 de abril, la resolución de aplicar la Carta Democrática a Venezuela, se le dio luz verde a la oposición para concretar sus propósitos desestabilizadores, señala la canciller venezolana Delcy Rodríguez. La ofensiva de la extrema derecha, aupada internacionalmente por políticos como Luis Almagro, Pedro Pablo Kuczynski, Trump, Temer, Macri, Peña Nieto, Rajoy, Santos y Uribe, y por la cúpula de la Iglesia de Venezuela, entró en una nueva fase: más violenta, más agresiva, continuada en el tiempo y recurriendo a métodos hasta ahora desconocidos, como el asedio a las embajadas de Venezuela en el mundo, el empleo de armas de fuego, el colocar a niños al frente de las manifestaciones. El guion ya conocido en Ucrania, Siria y otros países pretende ser reeditado en Venezuela.

Lo que aspiran, según autoridades venezolanas, es derrocar a Maduro para tomar el poder de forma inmediata, y ser proclamados como los salvadores del pueblo de una supuesta dictadura.

La deriva violenta de la extrema derecha venezolana no mide costos (vidas humanas), recursos (está muy bien financiada), ni consecuencias: el nulo compromiso con las reglas del juego democrático (por ejemplo, el respeto del período para el que fue electo Maduro y que termina en 2018) puede llevar a un callejón sin salida, a un enfrentamiento fratricida del que se sabe cómo comienza pero nunca como termina. El pequeño –y a la vez gran detalle– es el apoyo de un sector duro de la población (la alianza cívico militar chavista), al gobierno de Maduro y su determinación, pese a la dificultades económicas que vive el país, de mantener la revolución, profundizarla a través de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y evitar que se repita un golpe como los que ocurrieron en Honduras, Paraguay y Brasil. De hecho, el pueblo chavista se ha mantenido permanentemente movilizado para defender la revolución, destacándose las multitudinarias manifestaciones del 19 de abril y del 1ro de Mayo. En esta última, el Presidente Maduro anunció la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para profundizar el proceso y tratar de superar por medio del diálogo la difícil situación económica, política y social por la que atraviesa el país.

Métodos más sofisticados

Como señalamos, la extrema derecha, en los últimos cuarenta días ha recurrido a nuevos métodos como la desestabilización permanente: actúa todos los días, durante todo el día y la noche, no descansa los fines de semana ni los días festivos (Semana Santa, Día de la Madre). Las protestas, generalmente pacíficas, comienzan en la mañana y duran hasta las doce o una de la tarde. Luego por la tarde (15h00-16h00) entran los grupos violentos que actúan hasta altas horas de la noche.

Entre las acciones más comunes de la oposición violenta está la interrupción de calles y avenidas, el hostigamiento a funcionarios y simpatizantes del chavismo, ataque a edificios públicos, centros de salud, cuarteles y planteles educativos, incendio de unidades de transporte público, saqueo de comercios privados, asesinatos selectivos de chavistas, entre otros.

El objetivo es desmoralizar, desgastar a las fuerzas militares y policiales, obstaculizar la movilidad de la gente, interrumpir las actividades laborales, comerciales y educativas, no permitir, en suma, que los y las

venezolanos lleven una vida normal. Pretenden obtener créditos políticos con las acciones violentas, pero la mayoría de la población (incluyendo al chavismo y a la propia base social de la MUD), según varias encuestas, está cansada y las rechaza frontalmente.

La Guardia Nacional Bolivariana encargada de controlar el orden público y otros cuerpos de seguridad han sido el blanco de ataques de los grupos violentos. Como ya señalamos, dos guardias han sido asesinados, al mediodía del 15 de abril tres funcionarios (Jorge Escandón, Reinaldo Alvarado y Andrés Ospina) resultaron heridos durante una protesta opositora en la autopista del Este, municipio Naguanagua, estado de Carabobo (3). Frecuentemente reciben insultos y son atacados con bombas molotov, fuegos artificiales, pintura y piedras. En los últimos días, los manifestantes opositores lanzaron frascos con heces fecales y orina – bautizados como *puputov*– contra efectivos de seguridad bolivarianos (4), algo que retrata muy bien a quienes promueven estos actos.

Según Antonio González Plessmann, activista en defensa de los derechos humanos, estas acciones “tienen un sentido muy claro: provocar la reacción violenta de los cuerpos de seguridad para generar indignación y removilización en la población opositora y sostener el discurso de la existencia de un Estado represivo, que solo se sostiene por la fuerza que ejerce contra un sector pacífico de la sociedad”. (5)

La oposición y algunas ONGs manifiestan que la GNB y los agentes estatales han cometido violaciones de los derechos humanos como malos tratos en el momento de la detención, uso de balines, etc. El presidente Maduro señala que las fuerzas de seguridad, respetando el derecho constitucional a la manifestación pacífica, salen a contener las protestas sin armas, utilizando gases lacrimógenos y vehículos antimotines y haciendo el uso progresivo de la fuerza. Agrega que los agentes de los cuerpos involucrados en acciones represivas han sido puestos a disposición de la justicia, pero asegura que tampoco quedarán en la impunidad los autores de las llamadas “guarimbas” que están enlutando Venezuela.

Más que el manejo de la gestión gubernamental en Venezuela, lo que está en juego en este momento es la paz ya no solo de este país sino de todo el continente, una paz que se quebraría con una intervención extranjera ejecutada a nombre de la “crisis humanitaria”, como ya ha sucedido en otros rincones del globo.

Notas

- 1) Datos presentados en las Jornadas de Discusión sobre la Asamblea Nacional Constituyente, realizado en Caracas, el 12 de mayo de 2017 organizado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.
- 2) <https://www.youtube.com/watch?v=iUfcjaind>
- 3) Telesur, *MP venezolano investiga heridas a tres policías en protestas* <http://www.telesurtv.net/news/MP-venezolano-investiga-heridas-a-tres-policias-en-protestas--20170515-0049.html>
- 4) Álvaro Verzi Rangel, *La batalla de las ideas, según la pupucracia venezolana*, <http://www.alainet.org/es/articulo/185439>
- 5) Douglas Bolívar, “Es muy evidente que hay una orientación de no matar”, entrevista con Antonio González Plessmann <http://www.alainet.org/es/articulo/185443>

MÉXICO: LA VORÁGINE: CRIMEN CONTRA LA LIBERTAD

Guillermo C. Cohen-DeGovia

Junto con un mensaje, los arreglos florales dedicados al periodista Javier Valdez, asesinado el pasado lunes, fueron trasladados frente a la catedral de Culiacán Foto Carlos Ramos Mamahua

Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia, dice el inolvidable inicio de *La vorágine*, aquella novela que hace casi un siglo (1924) publicó el colombiano José Eustasio Rivera, inmortal desde entonces.

La violencia que en México nos envuelve sin ley y sin piedad se desencadenó como un turbión que recorre tierras, aguas, aire, todo el territorio de la nación, cuando la casta gobernante –Ellos, como los llama el pueblo– se jugó a los azares del mercado financiero mundial, por definición sin otra ley que la ganancia, lo que era el corazón y el alma de la Constitución de 1917: el artículo 27, piedra angular de toda la estructura jurídica alzada por los constituyentes de aquellos años de fuego.



Este artículo, en su versión de 1917, establecía la propiedad originaria, inalienable e indivisible de la nación sobre el suelo y el subsuelo de todo su territorio. Esta estructura jurídica conceptual era heredera explícita de las Ordenanzas de Aranjuez, dictadas en 1783 por Carlos III, rey de España, según las cuales las minas en el subsuelo de la Nueva España podían ser concedidas para su explotación a particulares, pero sin separarse del Real Dominio. La nación mexicana fue la heredera universal de los derechos de la corona, y así los reivindicó en su constitución.

El artículo 27 indicaba esta propiedad originaria como un elemento constitutivo de la soberanía nacional, y así lo invocó el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 como sustento jurídico inalienable de la expropiación petrolera y la reforma agraria ejidal. En esta arquitectura jurídica y conceptual suelo y subsuelo son propiedad de la nación, mientras el campesino ejidatario detenta la tenencia y el capitalista sólo la concesión, mientras renta agraria y renta minera tocan a la nación.

Era el sustento material y jurídico de la soberanía nacional —esta es nuestra casa y esta es nuestra ley— y una de las condiciones para su ejercicio sin hipotecas ni restricciones, por la comunidad nacional como un todo y por el Estado que a esa comunidad pertenece y se debe.

Desde el sexenio de Miguel de la Madrid esta arquitectura jurídica fue destruida para abrir paso al Gran Dinero, al capital financiero entonces emergente como la parte más dinámica y poderosa de los capitales nacionales: industriales, comerciales, agrarios. Desde los años 70 del siglo XX una corriente de economistas de izquierda —entre ellos Ernest Mandel, conocedor de México— estaba planteando este surgimiento poderoso de un capital financiero mexicano por entonces aún en embrión.

El terremoto del 19 de septiembre de 1985, que paralizó al gobierno federal mientras el pueblo salía al rescate de su propia gente entre las ruinas, fue como una rebelión de la naturaleza con el escenario del pacto diabólico de ese dinero sin tierra y sin ley que se convertiría desde el sexenio sucesivo en amo y señor del territorio de esta nación que no es suya, sino del muy antiguo pueblo mexicano.

La *narcoindustria* produce esencialmente para el mercado internacional. Allí están sus enlaces, sus grandes consumidores, su amplio mercado y sus finanzas. Su ámbito de transformación de dinero ilegal en capitales legales está sobre todo en la opacidad del sistema financiero internacional, en cuyo mundo se mueven y pertenecen las finanzas mexicanas. Como submundo ilegal y poderoso necesita, igual que en Italia, en España o en Estados Unidos, una cobertura protectora en los mundos de la política y de la seguridad. Son múltiples los estudios y más aún las investigaciones noveladas que describen este universo.

Nuestro colega el *Astillero* habló en estos días, por televisión, de la gran descomposición nacional en que este entrelazamiento entre *narcoindustria*, finanzas, mercados y política nos ha sumido. Habló también de la subordinación de buena parte del periodismo a las imposiciones, las exigencias y los espacios de ese poder, siempre presente e invisible como una gran desgracia, como decía Pablo Neruda en aquellos entonces.

No podemos ubicar el corazón de esta vorágine de violencia y desintegración solamente en la corrupción que prolifera en el mundo de la política. Este es, por hoy, un mundo subordinado al del gran dinero y, sobre todo, al gran dinero que no puede decir su nombre, a las finanzas clandestinas que se funden, casi invisibles, en la gran corriente financiera legitimada por las leyes, la economía, los capitales y las costumbres.

La corrupción es un subproducto, no un origen de la vorágine que nos arrastra. El capital financiero, al cual la vertiginosa revolución tecnológica, uno de cuyos productos es la digitalización, ha dado los instrumentos para tomar el mando de la economía, la política, la comunicación, los proyectos educativos y, *last but not least*, las tecnologías, las doctrinas, el destino y el uso de los ejércitos y las fuerzas armadas. Hoy su empresa es subordinar los vastos mundos de la vida a su comando y a sus fines ciegos e impersonales. Y no es perversión, sino la forma y el destino del Gran Dinero en el cambio de época que estamos viviendo en este siglo XXI.

¿Qué estaba indagando Javier Valdez cuando lo mataron? ¿Se había aventurado en este infierno de relaciones perversas en crecimiento, en el cual se cruzan los feminicidios, el tráfico de seres humanos, las innumerables fosas clandestinas? ¿Había empezado a tocar, como antes lo había hecho, regiones sensibles de ese universo opaco y poderoso?

No sabemos. Mientras tanto un espeso velo sigue cubriendo a los responsables y los ejecutores de Ayotzinapa, de Atenco, de Nochistlán, de toda la doliente geografía de las desaparecidas y los desaparecidos

y las fosas clandestinas en el territorio nacional.

De estas dimensiones, de estos peligros, es el desafío que enfrentó Javier Valdez con calma, paciencia y osadía. Nos lo ha heredado. Seámosle fieles, cada uno y cada una al modo que le digan su leal saber y entender, su oficio y su alma. Y por sobre todo tratemos de conocer y de comprender, no tanto la visible y terrible apariencia, sino sus secretas y extensas esencia y presencia.

Guillermo C. Cohen-DeGovia

ARGENTINA: CRITICAS AMBIENTALISTAS A LA CONSTRUCCION DE NUEVAS CENTRALES NUCLEARES

Calculan que costarán cuatro veces más que el plan RenovAr, pero producirán menos energía. El Gobierno busca en paralelo impulsar la minería de uranio, una de las más contaminantes y con graves antecedentes en el país

Juan Parrilla

Empezó con el pie derecho. A poco de asumir, el gobierno de Mauricio Macri impulsó una exitosa licitación de energías renovables que superó todas las expectativas y llevó a una segunda ronda de ofertas. Sin embargo, ahora enfrenta las críticas ambientalistas por dos ambiciosos proyectos, pues a las ya resistidas represas de la Patagonia ahora se sumaron las centrales nucleares que se construirán en las provincias de Buenos Aires y Río Negro. Entre las organizaciones sociales hay críticas por la falta de consulta y el tipo de energía elegida, mucho más peligrosa y costosa que las renovables.



Con los nefastos antecedentes de Chernobyl y Fukushima en el curriculum de la energía nuclear, el Gobierno mantuvo el tema en secreto, al punto que hasta hace unos días en Bahía Blanca todavía especulaban con la posibilidad de que una de las centrales se instale en esa ciudad. Ayer se supo que los proyectos son la postergada Atucha III, que al igual que sus "hermanas" estará a orillas del río Paraná, en el partido bonaerense de Lima, y otro que no tiene nombre y que se ubicará en Río Negro.

La polémica que despertó el anuncio no es sólo ambiental, sino también económica. La agencia Télam informó que con los 12.500 millones de dólares que con financiamiento chino el Gobierno piensa invertir en plantas nucleares se generarán 1.871 megavatios de capacidad. Del otro lado, los 59 proyectos de energía solar y eólica otorgados por el plan RenovAR ofrecerán una capacidad de 2.423,5 megavatios, que estarán disponibles mucho más rápido y no costarán más de 4 mil millones de dólares. En otras palabras, el precio por megavatio de los proyectos del RenovAR será cuatro veces menor que el de las centrales nucleares, de acuerdo a las estimaciones del propio oficialismo.

El costo por megavatio de los proyectos del RenovAR será cuatro veces menor que el de las centrales nucleares

Una aclaración: ese es un cálculo muy conservador, ya que habría que agregarle que la inversión total por las centrales sería de 14 mil millones de dólares. Pero, además, habría que sumar los enormes costos previos a la construcción de una central nuclear (el uranio se paga, mientras que el sol y el viento, no) y la gestión de residuos a perpetuidad (cuesta más la gestión de los residuos radioactivos que la energía misma).

"La vida media del plutonio, por ejemplo, es de 24 mil años. O sea que esos residuos hay que gestionarlos durante todo esos años, porque una millonésima parte de un gramo de plutonio podría causar cáncer. Y con 10 kilos se podría matar la vida en la Patagonia", describió ante la consulta de Infobae el chubutense Pablo Palicio Lada, uno de los referentes del movimiento antinuclear. "El mundo se está replanteando la cuestión nuclear, porque no es competitiva. Japón lleva gastados más de 100 mil millones de dólares sólo en contener el desastre en Fukushima", añadió.

Tras advertir que la energía nuclear es "sucía, peligra y obsoleta", Paul Horsman, especialista en energía de Greenpeace Argentina, explicó que "existen alternativas más limpias, baratas, rápidas y mucho más seguras". Mientras los defensores de Atucha III aseguran que hay más de 4 mil puestos de trabajo en juego, el especialista recordó que en los Estados Unidos "las industrias solar y eólica están creando empleos 12 veces más rápido que otras, e incorporando más gente que los sectores de petróleo, carbón o gas".

En la Patagonia hubo una fuerte reacción de un nutrido grupo de 35 organizaciones sociales que se adelantaron al anuncio del Gobierno y el lunes le enviaron una carta al embajador chino Yang Wanming. Allí manifestaron su "oposición categórica a la instalación de cualquier tipo de central nucleoelectrica en ningún lugar del territorio patagónico".

"Más allá de la decisión de los gobiernos argentino y rionegrino, los habitantes patagónicos rechazamos dicha acción por inconsulta, arbitraria e ilegítima. Por considerar esta fuente de energía como sucia, peligrosa y costosa", advirtieron.

Además, aclararon que también están en contra del "circuito completo del uranio, desde la prospección hasta los residuos, la infraestructura asociada y los usos que se le quiere dar a esa energía, especialmente porque cada uno de esos procesos contradice los objetivos y (sobreactuados) compromisos de atender el cambio climático".

Este último punto es clave. Desde hace tiempo el gobierno no esconde sus ambiciones de aplicar una técnica parecida al fracking para obtener uranio en el yacimiento Bajo de Santa Rosa, en Río Negro, a través de la minera de capitales canadienses Cielo Azul. Es la llamada "lixiviación in situ", que se realiza con agua y ácido sulfúrico, y es ambientalmente más riesgosa que la que se usa en la minería de oro y plata. También Cambiemos busca quitar la prohibición que rige en Chubut para habilitar la explotación a cielo abierto del Cerro Solo. El objetivo es abastecer a las centrales de Atucha I y II, y Embalse, además de las dos que se construirán, y sustituir importaciones, ya que la minería de uranio fue interrumpida en 1997. Desde ese entonces, todavía se trabaja en la remediación de yacimientos como Los Gigantes, en Córdoba, y Sierra Pintada, en Mendoza, que han dejado lo que Pablo Palicio Lama calificó como "un desastre radioactivo".

El argumento más fuerte del gobierno es que la energía nuclear no emite dióxido de carbono (CO2), uno de los gases que provoca efecto invernadero. En un reciente artículo, Andrés Arnone derribó ese alegato así: "Esto es verdad solamente durante el proceso en el cual las barras de uranio generan vapor y hacen girar las turbinas, pero en todos los procesos anteriores y posteriores se genera CO2". Y concluyó: "Según distintos estudios en donde comparan todos los procesos necesarios como la minería, el transporte, la construcción, el mantenimiento, etcétera, para producir electricidad con distintas tecnologías, la energía nuclear produce 66 gr de CO2 por cada KWH de electricidad, mucho más que la mayoría de las energías renovables como la eólica (10 gr/KWH) o solar térmica (13 gr/ KWH), aunque menos que el carbón (1000 gr/KWH), el gas (443 gr/KWH) o el diesel (778 gr/KWH)".

RTF: <http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo XVII/912.zip>

PDF: <http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo XVII/912.pdf>

SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A "El Grano de Arena" o CAMBIO DE MAIL:

<http://list.attac.org/www/subscribe/attac-informativo>

Para obtener un número anterior entrar en

<http://list.attac.org/www/arc/attac-informativo>

Distribución: Tom Roberts

Edición: Susana Merino- Co fundadora de ATTAC Argentina